

TEORÍA SOCIAL, MARGINALIDAD URBANA Y ESTADO PENAL

Aproximaciones al trabajo
de Loïc Wacquant

IGNACIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
(*Editor*)

Miguel Alhambra Delgado

Luis Enrique Alonso

Pierre Bourdieu

Leonidas K. Cheliotis

José Manuel Fernández

Francisco Ferrándiz

Ignacio González Sánchez

Félix A. López Román

Dario Malventi

Markus-Michael Müller

Juan S. Pegoraro

Alfonso Serrano Maíllo

Loïc Wacquant

Sappho Xenakis

**¿QUÉ TIENE QUE VER EL NEOLIBERALISMO
CON ESTO? HACIA UNA ECONOMÍA POLÍTICA
DEL CASTIGO EN GRECIA¹**

Leonidas K. Cheliotis y Sappho Xenakis

Durante los últimos quince años, Loïc Wacquant no sólo ha ayudado a asentar las bases epistemológicas para descifrar la relación entre neoliberalismo y penalidad, ni se ha limitado al escrutinio empírico de varias y variables jurisdicciones con vistas a «rastrear los discursos punitivos, normas y políticas elaboradas en los Estados Unidos como ingredientes constituyentes del gobierno neoliberal de la desigualdad social» (Wacquant, 2009a: 172). Wacquant también ha llegado a ser una de las voces públicas internacionales más críticas de la penalidad neoliberal (ver más detalladamente en Loader y Sparks, 2010). De hecho, mientras viajaba por todo el mundo en su calidad de intelectual público, Wacquant llegó a reconocer que «la difusión de la penalidad neoliberal no está sólo más avanzada, sino también más diversificada y de una manera más compleja que la retratada» (en su *Las cárceles de la miseria*). Por ejemplo, «al igual que hay variedades de capitalismo, hay muchos caminos a la supremacía del mercado, y así muchas rutas posibles a la penalización de la pobreza» (Wacquant, 2009a: 175). De ahí, finalmente, la «invitación» a sus lectores alrededor del mundo a adoptar y plantear el estudio de la política y de la práctica penal desde una perspectiva de la economía política (ibíd.: 176). La invitación no está condicionada. Para parafrasear el

¹ Por sus útiles comentarios a borradores anteriores, nos gustaría dar las gracias a Ignacio González Sánchez, Nicola Lacey y Fergus McNeil. Traducción de Ignacio González Sánchez.

propio saludo de Wacquant al antidogmatismo bourdieuniano, una invitación a pensar con Wacquant es necesariamente un llamamiento a pensar más allá de Wacquant, y contra él siempre que se requiera (Wacquant, 1992a: xiv).

El neoliberalismo, de acuerdo con Wacquant, es un «proyecto político transnacional que apunta a rehacer el nexo entre mercado, Estado y ciudadanía desde arriba». Es conducido por una «nueva clase dirigente global que se ocupa de definirlo», y que abarca a directivos de firmas transnacionales, políticos con altos cargos, funcionarios públicos y altos cargos de organizaciones multinacionales (por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial), así como expertos técnico-culturales (por ejemplo, trabajadores legales y de los medios de comunicación) (Wacquant, 2009b: 306-307). Wacquant explica detenidamente que el neoliberalismo conlleva no solamente la reafirmación de las dinámicas de producción capitalista y del intercambio en el mercado, sino la articulación de cuatro lógicas institucionales: desregulación económica, la retirada de la protección social, el tropos cultural de la responsabilidad individual, y un aparato penal continuamente expansivo. En vez de, entonces, ser una desviación del neoliberalismo, la penalidad es uno de sus componentes esenciales. Más específicamente, al mismo tiempo que públicamente se repudia la intervención en asuntos sociales y económicos para asegurar la competitividad nacional en el escenario global, los estados neoliberales promueven el «nuevo “sentido común punitivo» forjado en los Estados Unidos» (Wacquant, 2009a: 162), lo que equivale a decir que elevan la inseguridad criminal y el castigo a la primera línea de las prioridades gubernamentales. La finalidad subyacente es gestionar las reverberaciones sociales de la «inseguridad social avanzada» que las políticas neoliberales generan entre las clases medias y bajas. En lo más bajo de la estructura de clases, el castigo funciona para contener los desórdenes causados por la «inseguridad objetiva» del trabajo asalariado flexible y la reducción del estado social (ibíd.: 93). Simultáneamente, castigar a los pobres crea una conveniente válvula de escape para la inseguridad «subjetiva» experimentada por las clases medias, «cuyas perspectivas de reproducción sin sobresaltos o de pros-

perar se han empañado cuando la competencia por las posiciones sociales valoradas se ha intensificado y el estado ha reducido su provisión de bienes públicos» (Wacquant, 2009b: 300). Como tal, el castigo de las regiones inferiores del espacio social compensa el déficit de legitimación sufrido por los líderes estatales en los frentes económico y social.

Nuestro objetivo en este artículo es testar la tesis de la penalidad neoliberal de Wacquant en el contexto griego. Últimamente, Grecia ha sido el foco de una atención internacional considerable, no sólo en relación con la crisis financiera, sino también por asuntos relacionados con la ley y el orden. Wacquant, por su parte, incluye a Grecia entre aquellos países que se han unido al «consenso de Washington» en torno al castigo» (Wacquant, 2009a: 3). Pero mientras que habla del caso griego en comparaciones muy generales entre países, no ahonda en complejidades histórico-nacionales ni en otros detalles empíricos. Esta omisión oscurece ideas importantes en la comprensión de Grecia como tal y, de manera más general, en la relación entre neoliberalismo y penalidad. De hecho, Grecia se presta fácilmente a una evaluación crítica del grado en que las políticas penales incubadas en América se han globalizado como parte de la dispersión del neoliberalismo. Por un lado, Grecia comparte la tendencia internacional generalizada a un incremento punitivo en los últimos años. Por el otro, como una sociedad post-dictatorial, ha conocido intensos periodos punitivos en la memoria reciente. Es más, como un país de la semiperiferia de la economía mundial, Grecia ha experimentado una trayectoria en su desarrollo capitalista distinta, comparado con los países del centro de Occidente².

² De acuerdo con la teoría del sistema-mundo, los Estados «céntricos» y «periféricos» denotan a los ganadores y los perdedores del intercambio internacional de bienes. «Un Estado es central (o periférico) principalmente porque sus procesos de producción son altamente rentables (o menos rentables) y dominados por técnicas de capital intensivo, alta tecnología, mano de obra cualificada y altamente pagada (o bajo beneficio, técnicas de trabajo intensivo y salarios bajos coercitivos). Por consiguiente, un Estado es semiperiférico, primero porque una «mezcla equilibrada» de actividades centrales y periféricas se desarrollan dentro de sus fronteras». Adicionalmente, un Estado semiperiférico se caracteriza por marcadas luchas políticas «para actuar sobre las estructuras estatales y las políticas a favor de sus respectivos intereses económicos (de frac-

Comenzamos examinando las tendencias en punitividad en Grecia expresadas a través de indicadores de encarcelamiento (si bien, por supuesto, uno podría seguir a Wacquant explorando otras facetas adicionales del sistema de justicia criminal tales como la policía). Nuestro método difiere del de Wacquant de dos maneras importantes. Primero, en vez de usar censos de la población carcelaria basados en fotos de un día o ingresos anuales en prisión, utilizamos indicadores que permiten una mayor comprensión de la envergadura del uso del encarcelamiento: el número de casos de delincuentes mantenidos en custodia durante un año³ y la duración de la estancia entre rejas, determinados tanto por la duración de la sentencia como por la incidencia de la libertad anticipada⁴. Y segundo, en vez de restringir nuestro análisis a «la última docena de años» (con lo que Wacquant (2009b: 88) se refiere al período 1985-2000), tomamos una perspectiva más amplia. Para localizar las raíces de las causas de una tendencia dada, es necesario no sólo trazar su origen, sino también contextualizar y comparar su evolución vis-à-vis con momentos pasados⁵. Si bien descubrimos amplia evidencia con-

ciones de la burguesía, de los trabajadores y de actores económicos externos)» (Tayfur, 2003: 21-22).

³ En inglés, *caseloads*. En castellano no existe ningún concepto que recoja en una palabra esta forma de medir la extensión de la población carcelaria. Los *caseloads* se calculan sumando al número de presos que había a comienzos de año los ingresos procedentes de libertad que se dan durante ese año. De esta manera se pretende captar mejor el número de personas a las que afecta el encierro, recurriendo al total de personas que se han visto afectadas por la cárcel de manera directa durante ese año, más que cuántos presos había en un día determinado. Dado que los autores utilizan mucho los *caseloads*, y dado que no hay una palabra equivalente en castellano, sino que exigiría incluir en muchas frases la expresión «el número de casos durante un año», se ha optado por omitirlo a lo largo del texto, recordando al lector que, salvo se especifique lo contrario, los datos de presos en Grecia que aparecen en el texto se refieren al *caseload*. (Nota del traductor).

⁴ Una explicación más completa también abordaría la detención de inmigrantes. Wacquant emplea datos referidos a la duración de las estancias en prisión y las variables en las que fundamenta en su comparación de la «evolución carcelaria» entre EE.UU. y Francia desde mediados de los setenta, pero no cuando hace referencia a Grecia y otras jurisdicciones como España, Portugal e Italia, lo que evita comprobar el argumento con una profundidad uniforme. Nuestro análisis se basa en datos compilados por el Servicio Nacional de Estadística de Grecia (NSSG) (ver en detalle Cheliotis, 2010a).

⁵ En su explicación del «hiperencarcelamiento» en América, el propio Wacquant vuelve a la primera historia de la cárcel en el siglo XVI para mostrar que

vincente del intenso y creciente punitivismo en la Grecia contemporánea, sucede que estas tendencias punitivas se anticiparon a la reciente llegada de las políticas neoliberales al país, y de hecho hay precedentes más descarnados a lo largo del siglo XX. Mientras que lo primero deja al neoliberalismo con un limitado rol penal, cuanto menos, —el de realzar, en oposición al de engendrar, la revitalizada expansión del encarcelamiento—, lo segundo llama la atención sobre las formas y funciones del poder estatal característico de las semiperiferias capitalistas.

Que el neoliberalismo es poco pertinente para el caso griego se hace más evidente cuando desplazamos el foco de atención del mundo penal hacia la historia del *welfare* y la regulación económica del país. Acorde con sus estatus semiperiférico, Grecia ha conocido desde hace mucho una provisión insuficiente de bienestar social (*social welfare*) —a pesar de que el gasto ha seguido una tendencia de aumento general durante los últimos cincuenta años— y una amplia flexibilidad informal en las relaciones laborales. Aunque las reformas neoliberales fueron introducidas a nivel de la elaboración de políticas durante los 90, fueron modestas en alcance, y fueron implementadas de manera lenta e irregular. En conjunto, entonces, mientras que apoyamos la llamada de Wacquant a «incorporar las transformaciones en materia de asistencia social y justicia penal a un único marco teórico igualmente atento a los momentos instrumentales y expresivos de la política pública» (Wacquant, 2009a: 175), vemos deficiente el neoliberalismo como una explicación de la punitividad en la Grecia de hoy. En su lugar, y hasta lo que el espacio permite, apuntamos hacia la configuración de las tensiones y conflictos sociales, políticos y económicos de las sociedades semiperiféricas. Compartiendo

«el cautiverio penal se desarrolló, no para combatir el crimen, sino para dramatizar la autoridad de los dominantes, y para reprimir la holgazanería y fortalecer la moralidad entre los vagos, los mendigos y las diversas categorías lanzadas a la deriva con la llegada del capitalismo». «El auge de la cárcel», Wacquant concluye, «fue una parte fundamental de la construcción del primitivo Estado moderno para disciplinar al naciente proletariado urbano y para organizar la soberanía en beneficio de la ciudadanía emergente. Lo mismo es cierto cuatro siglos después en la metrópolis dualizada del capitalismo neoliberal» (Wacquant, 2010: 7-8).

la preocupación de Wacquant por una «reflexividad epistémica», por la cual se aprecia que los procedimientos y los efectos de la práctica intelectual son condiciones necesarias de cualquier teoría crítica de la sociedad (ver Wacquant, 1992b: 36-46), concluimos con algunos pensamientos sobre los peligros políticos de la tesis de la penalidad neoliberal.

1. LA PUNITIVIDAD EN GRECIA: TRAZANDO LAS TENDENCIAS CARCELARIAS

Cuando argumenta que la penalidad neoliberal ha cruzado las fronteras de EE.UU. y se ha extendido por Europa y América Latina, Wacquant nos pide que consideremos una gran cantidad de tendencias, incluyendo tasas de encarcelamiento expansivas, niveles de delincuencia desproporcionadamente más bajos y la sobrerrepresentación de personas que han cometido delitos relacionados con las drogas (*drug offenders*), extranjeros y pobres (tres categorías que se solapan) en las poblaciones carcelarias. Más abajo exploramos esas facetas de la tesis de la penalidad neoliberal para el contexto griego. Nuestros hallazgos, por un lado, confirman que el uso del encarcelamiento en Grecia ha sufrido recientemente una fuerte inflación que alberga poca relevancia con las tasas de delincuencia; y que afecta principalmente a personas que han cometido delitos relacionados con las drogas (*drug offenders*), a los extranjeros y a los pobres. Por otro lado, el auge en el encarcelamiento comenzó antes de los años asociados con la llegada del neoliberalismo al país y tiene antecedentes bastante más dramáticos en la memoria reciente. Surge así la duda de hasta qué punto el neoliberalismo puede haber disparado una nueva era en la práctica penal griega.

1.1. «Inflación carcelaria»: 1980-2006

Wacquant habla de un «aumento acelerado y continuo de los índices de encarcelamiento en casi todos los países de la Unión durante la última docena de años» (Wacquant, 2009a:

88). Ciertamente, Grecia no es una excepción. Siguiendo a un modesto descenso generalizado durante los 80, el encarcelamiento en el país ha conocido un crecimiento explosivo durante las dos últimas décadas.

Entre 1980 y 1989, el total anual de presos (incluyendo los preventivos) cayó un 6%, de 11.455 (o 119 por cada 100.000 habitantes) a 10.763 (o 107 por cada 100.000 habitantes)⁶. Esto fue debido a un descenso de presos penados, suficientemente importante para ensombrecer el auge contemporáneo en presos preventivos. Por un lado, los presos preventivos aumentaron un 22,8% entre 1980 y 1989, de 3.269 (o 34 por cada 100.000 habitantes) a 4.015 (o 40 por cada 100.000 habitantes), con la proporción de presos preventivos entre el total de encarcelados también subiendo, de 28,5% al 37,3%. Por otro lado, la cantidad de presos penados cayó un 17,5%: de 8.186 (u 85 por cada 100.000 habitantes) en 1980 a 6.748 (o 67 por cada 100.000 habitantes) en 1989. En consecuencia, la proporción de presos penados entre el total de los presos cayó del 71,4% al 62,6%, si bien aún representaban el grueso de la población carcelaria.

Las tendencias se invirtieron entre 1990 y 2006. La cantidad anual total de presos (incluyendo presos preventivos) aumentó un 52,6%: de 11.835 (o 116 por cada 100.000 habitantes a 18.070 (o 162 por cada 100.000 habitantes). Esto no fue debido tanto a un aumento del número de presos preventivos como al de presos penados. Mientras que el número de presos preventivos aumentó un 15,3% entre 1990 y 2006, de 4.247 (o 42 por cada 100.000 habitantes) a 4.900 (o 44 por cada 100.000 habitantes), la proporción de presos preventivos entre el total de los presos cayó, de un 35,8% a un 27,1%. Por el contrario, el número de presos penados aumentó en un enorme 73,5%: de 7.588 (o 75 por cada 100.000 habitantes) en 1990 a 13.170 en 2006 (ascendiendo a una tasa de 118 por cada 100.000 habitantes, la más alta desde la caída de la

⁶ No contar o ignorar el subtotal de los presos preventivos no puede sino subestimar la magnitud del encarcelamiento, especialmente desde que la duración media de la prisión preventiva en Grecia ha excedido ampliamente el mínimo de las penas privativas de libertad, y es la más alta de la UE (ver Cheliotis, 2010a).

junta militar en 1974). En consecuencia, la proporción de presos penados entre el total de la población penitenciaria se incrementó de un 64,1% en 1990 a un 72,8% en 2006 (ver Tabla 1).

Tabla 1. *Caseload* de presos penados y preventivos en Grecia, 1980-2006; tasa de encarcelamiento de presos penados y preventivos por cada 100.000 habitantes en Grecia, 1980-2006

Año	<i>Caseload</i> total de presos		<i>Caseload</i> de presos penados			<i>Caseload</i> de presos preventivos		
	n.	Por cada 100.000 habitantes	n.	%	Por cada 100.000 habitantes	n.	%	Por cada 100.000 habitantes
1980	11.455	119	8.186	71,4	85	3.269	28,5	34
1981	10.306	106	7.200	69,8	74	3.106	30,1	32
1982	9.602	98	6.417	66,8	66	3.185	33,1	33
1983	10.110	103	7.043	69,6	72	3.067	30,3	31
1984	10.082	102	7.214	71,5	73	2.868	28,4	29
1985	9.114	92	6.198	68,0	62	2.916	31,9	29
1986	9.818	99	6.420	65,3	64	3.398	34,6	34
1987	10.536	105	6.960	66,0	70	3.566	33,9	36
1988	10.422	104	6.921	66,4	69	3.501	33,5	35
1989	10.763	107	6.748	62,6	67	4.015	37,3	40
1990	11.835	116	7.588	64,1	75	4.247	35,8	42
1991	12.595	123	7.992	63,4	78	4.603	36,5	45
1992	14.242	137	8.649	60,7	83	5.593	39,2	54
1993	14.847	142	9.866	66,4	94	4.981	33,5	48
1994	14.390	136	9.883	68,6	93	4.507	31,3	43
1995	13.944	131	9.377	67,2	88	4.567	32,7	43
1996	13.380	125	8.885	66,4	83	4.495	33,5	42
1997	13.344	124	8.997	67,4	83	4.347	32,5	40
1998	13.912	128	10.130	72,8	93	3.782	27,1	35
1999	13.409	123	9.910	73,9	91	3.499	26,0	32
2000	14.708	134	11.555	78,5	106	3.153	21,4	29
2001	16.446	150	12.687	77,1	116	3.759	22,8	34

Año	Caseload total de presos		Caseload de presos penados			Caseload de presos preventivos		
	n.	Por cada 100.000 habitantes	n.	%	Por cada 100.000 habitantes	n.	%	Por cada 100.000 habitantes
2002	16.444	150	12.684	77,1	115	3.760	22,8	34
2003	17.191	156	12.889	74,9	117	4.302	25,0	39
2004	17.227	156	12.634	73,3	114	4.593	26,6	42
2005	17.869	161	13.082	73,2	118	4.787	26,7	43
2006	18.070	162	13.170	72,8	118	4.900	27,1	44

Fuente: Servicio Nacional de Estadística de Grecia (SNEG), Anuario estadístico y Estadísticas judiciales. La información fue recopilada y analizada por el autor.

Nota: Los datos de 2002, 2003 y 2004 están basados en las estimaciones del SNEG, tal y como fueron publicadas originalmente. El último anuario estadístico (2007) del SNEG ofrece unas estimaciones ligeramente distintas que apenas afectan el análisis. La incidencia anual de las tasas de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes están redondeadas, y se calcularon en base a las estimaciones del SNEG para la población total del país a 30 de junio de cada año.

1.2. La «desconexión delincuencia-encarcelamiento»

Si bien Wacquant (2009a: 88) argumenta que «la delincuencia aumentó notablemente en las sociedades europeas [entre 1985 y 2000], mientras que se estancó en los Estados Unidos», habla de la «desconexión delincuencia-encarcelamiento» como de una constante universal a través del tiempo y del espacio. «Los estudios criminológicos comparativos», escribe, «establecen categóricamente que no existe una correlación sólida, en ningún país y en ningún momento, entre el índice de encarcelamiento y el nivel del delito» (Wacquant, 2009b: 275; comparar con Nelken, 2010). Por lo que concierne a Grecia, mientras que (o, de hecho, porque) las tasas de delincuencia no han aumentado significativamente, la tesis de la «desconexión delincuencia-encarcelamiento» conserva su validez⁷.

⁷ Para adelantarnos a las ideologías de control del delito: el modesto incremento de delincuencia no es de ninguna manera el producto de un mayor encarcelamiento (ver más en Cheliotis, 2010a).

Durante el período 1980-2006, el total anual de los delitos registrados por la policía aumentaron un 57%, de 295.353 a 463.750. Expresado como tasa por cada 100.000 habitantes, el volumen de la delincuencia aumentó un 35,8%, de 3.063 en 1980 a 4.160 en 2006. Durante el mismo período, sin embargo, el subtotal de delitos de tráfico (por ejemplo, exceso de velocidad y aparcamiento ilegal) aumentó un 95,1%, de 114.138 a 222.720, y en un 68,8% en la tasa por cada 100.000 habitantes, de 1.184 a 1.998. En buena medida, por lo tanto, el aumento en el volumen total de delitos fue debido al aumento en el volumen de delitos de tráfico, o sea, delitos de poco interés criminológico y que sólo muy raramente terminan en encarcelamiento. De hecho, una vez que descontamos los delitos de tráfico del volumen total de los delitos, observamos que el número total de delitos registrados por la policía aumentó un 33% (de 181.215 a 241.030), y un modesto 15% como tasa por cada 100.000 habitantes (de 1.879 a 2.161)⁸.

De una u otra manera, el aumento en los delitos registrados por la policía no puede dar cuenta del hecho de que el total anual de presos penados y preventivos aumentó simultáneamente como número absoluto (de 10.703 en 1980 a 17.726 en 2006) en un 43,2% como tasa por cada 100.000 habitantes (de 111 a 159) y en un 24,5% como tasa por cada 100.000 delitos registrados por la policía (de 59 a 73,5)⁹. Por decirlo de otra manera, la posibilidad de tratar con la delincuencia por medio del encarcelamiento aumentó en un cuarto durante el período 1980-2006, mientras que la probabilidad de encarcelamiento bajo condena creció aún más: un 29,7% como tal (de 41 a 53,2 en tasa por cada 1000 delitos registrados por la policía), en un 129,5% para condenas de un año o más (de 19,3 a 44,3 en tasa por cada 1000 delitos registrados por la policía), y en un 246,1% para condenas de tres o más años (de 10,4 a 36 en tasa por cada 100.000 habitantes). Al mismo tiempo, la

⁸ Las encuestas de victimización claramente señalan hacia la misma dirección (ver Cheliotis y Xenakis, 2011, en prensa).

⁹ Los datos de encarcelamiento referidos en esta sección no tienen en cuenta los presos por delitos de tráfico.

probabilidad de prisión preventiva aumentó un 29,4% como tasa por cada 100.000 habitantes (de 34 a 44), y en un 12,7% como tasa por cada 1.000 delitos registrados por la policía (de 18 a 20,3).

1.3. Los «clientes preferidos» de las cárceles griegas

Examinando lo que describe como el espectacular incremento del encarcelamiento en Europa, «de Oslo a Bilbao y de Nápoles a Nottingham vía Madrid, Marsella y Múnich», Wacquant advierte sobre la creciente proporción de adictos y traficantes de drogas entre las poblaciones carcelarias. Esto, sugiere, es porque «la política contra la droga sirve de pantalla a una «guerra contra los integrantes de la población percibidos como los menos útiles y potencialmente los más peligrosos: desocupados, sin techo, indocumentados, mendigos, vagabundos y otros marginales» (Wacquant, 2009a: 98; la cita es de Christie, 1994: 69). En referencia a países particulares (por ejemplo, Inglaterra y Francia), Wacquant añade que los «clientes naturales» de las cárceles europeas también son encerrados por delitos contra la propiedad como los robos y por violaciones de leyes de inmigración (ver más detalladamente en Wacquant, 2009a: 93-100). Este análisis también es válido para Grecia.

Durante el período 1980-1989, la categoría de delitos más comúnmente penada era la de los delitos contra la propiedad (por ejemplo, robo, hurto y atraco), con la tasa pertinente aumentando de un 22,8% a un 34,1%. Los delitos relacionados con las drogas (por ejemplo, consumo ilegal, tráfico) eran los segundos, con su proporción en el total incrementado de un 7,6% a un 12,8%. Mirando al período 1990-2006, los delitos relacionados con drogas se convirtieron en el delito principal en las condenas, con el pertinente incremento del 14,2% al 32,3%. El aumento fue más marcado para el tráfico de drogas (un delito a menudo cometido por adictos y comúnmente combinado por los jueces con posesión de pequeñas cantidades de drogas), que estalló de un 56,8% a un 94,2% en la proporción de los presos penados por delitos de drogas, y de un 8,1% a un 30,5% en la proporción de todos los

presos penados. En segundo lugar estaban los delitos contra la propiedad, cuya proporción en el total cayó ligeramente, de un 28% a un 25%. Mención especial requiere la entrada, salida o estancia ilegal en el país, que creció hasta convertirse en una de las categorías de delitos más comunes entre los presos penados (y entre los no griegos en particular). Desde 1993, cuando por primera vez se recogieron estadísticas oficiales, a 2006 creció en la proporción del total desde un 6,9% hasta un 13,9%.

Con respecto a la nacionalidad de los presos penados, la elaboración de datos oficiales no comenzó hasta 1996. Desde ese año y hasta 2006, el total anual de condenados no griegos creció un 140,5%: de 2.252 (o 404 por cada 100.000 habitantes no griegos) a 5.420 (o 559 por cada 100.000 habitantes no griegos). Consecuentemente, la proporción de no griegos entre el total de penados se incrementó de un 25,3% a un 41,1% —un porcentaje cuatro veces mayor que la proporción estimada de no griegos en la población general del país. El nivel y la naturaleza de la involucración delictiva de los no griegos, sin embargo, dejan mucho sin responder sobre las fuerzas motrices que subyacen a su sobrerrepresentación entre los presos penados. Entre 2000 y 2006, por ejemplo, la tasa de delincuentes no griegos registrados por la policía era 1,6 veces mayor que la de los griegos, pero la probabilidad de encarcelamiento con condena era 7,9 veces mayor para los no griegos que para los griegos. Durante el mismo período, los no griegos representaban, de media, el 43,2% en el total de los presos penados por un delito relacionado con drogas, pero un análisis secundario de los datos policiales revela que la proporción media de no griegos entre los infractores de delitos relacionados con drogas sólo suponía el 10,9%. Expresado en ratio de tasas por cada 100.000 personas, la probabilidad media de un no griego de ser condenado por un delito relacionado con las drogas era 9,4 veces más alta que para los griegos, pero la tasa de no griegos registrados por la policía entre los infractores en este tipo de delitos era sólo un 1,5% mayor que la tasa de los griegos¹⁰.

¹⁰ Todo esto deber ser sopesado en un escenario de muy diversas desventajas que hace a los no griegos más susceptibles de quedar atrapados por la red de justicia penal (ver más en Cheliotis, 2010a).

Finalmente, la mayoría de los presos penados son de la clase trabajadora, tal y como queda ilustrado, *inter alia*, por su bagaje ocupacional y educativo. En 1980, por ejemplo, el 57,4% de los presos penados habían sido empleados previamente como trabajadores manuales, cualificados o no cualificados, o como trabajadores en el sector servicios. El ratio no había cambiado en 1989 pero aumentó del 59,2% en 1990 al 67% en 2006. En 1993, cuando por primera vez se elaboraron datos oficiales sobre el nivel educativo de los presos, el 61% de los presos penados eran o analfabetos o sólo habían completado la educación primaria, un porcentaje que aumentó al 75,4% en 2006¹¹. Los presos extranjeros están vastamente sobrerrepresentados en términos de ocupaciones de clase trabajadora pero no necesariamente en términos de un historial educativo pobre (ver, por ejemplo, Aloskofis, 2005).

1.4. «La inflación carcelaria» reexaminada

Hasta ahora el análisis apoya los principios básicos de la tesis de la penalidad neoliberal. Sería muy apresurado, sin embargo, asumir que Grecia ha sucumbido al «nuevo “sentido común punitivo”» (Wacquant, 2009a: 162). Como el propio Wacquant indica, los niveles de encarcelamiento no pueden ser explicados sin referencia a la duración de las penas impuestas y cumplidas. Él argumenta, por ejemplo, que «el incremento de la cantidad de presos [en Europa] se debe más a la mayor duración de las sentencias que a una fuerte inflación en los ingresos en prisión» (ibíd.: 88). En otro punto, por ejemplo en su explicación del «fuerte crecimiento de la demografía carcelaria» en Francia, Wacquant también llama la atención sobre el rol exacerbado que juega la «menor cantidad de salidas de prisión» (ibíd.: 90). Estas variables no sólo son apropiadas al caso griego (ver Cheliotis, 2010a), sino que en un examen más detenido revelan que la punitividad penal en el país comenzó su camino

¹¹ Cambios recientes en la clasificación de las categorías laborales pueden haber inflado ligeramente las cifras de 2006.

ascendente no en los 90, sino en los 80. Lo que esto implica, como se aclara más tarde en el artículo, es que el auge de la punitividad penal precedió a la introducción de las reformas neoliberales en Grecia, y que el neoliberalismo no puede, por lo tanto, explicar la tendencia¹².

Durante el período 1980-1989, la duración media de las estancias en prisión bajo condena vio un significativo crecimiento del 47%: de 3,8 meses a 5,6 meses. En términos de penas de privación de libertad, hubo una gran expansión de presos sentenciados a períodos de cinco a veinte años (un 77,2%: de 874 a 1.549) acompañada de un incremento de presos sentenciados a períodos de uno a tres años (un 15,7%: de 1.607 a 1.860), de tres a cinco años (un 4,3%: de 854 a 891) y cadena perpetua (un 12,5%: de 167 a 188). En 1989, el porcentaje de presos con sentencia para un período de uno a tres años era el mayor (27,5%), seguido de cerca por los presos sentenciados a un período de cinco a veinte años (22,9%). No se trata, entonces, de que la judicatura fuese más liberal en su uso de las penas privativas de libertad durante los 80, sino que su mentalidad tradicionalmente punitiva (para lo cual, ver más en detalle Cheliotis, 2010b) se manifestó en el uso expansivo de sentencias de internamiento largas más que en el uso de penas privativas de libertad como tal.

Como se puede ver en el período 1990-2006, la duración media de las estancias en prisión bajo condena experimentó un auge meteórico del 1.437%, de 5,1 meses a 73,3 meses (o 6,1 años). En términos de sentencias bajo custodia, hubo una expansión enorme de presos sentenciados a períodos de tres a cinco años (un 323,3%, de 616 a 2.608), de cinco a veinte años (un 332,7%, de 1.246 a 5.392), y a cadena perpetua (un 155,1%,

¹² Uno también podría fijarse en el incremento del uso de la detención preventiva durante la década de los ochenta, ya que dio lugar a la rápida expansión en el uso del encarcelamiento bajo condena desde 1990 en adelante, lo que marcó un cambio cualitativo más que cuantitativo. De manera similar, uno podría señalar la consistente sobrerrepresentación de la población obrera en los presos penados, pese a las crecientes diferencias étnonacionales. De hecho, la propia consistencia en el uso del encarcelamiento se alza en áspero contraste con la irregularidad en la aplicación de las posteriores reformas neoliberales.

de 270 a 689). El porcentaje más alto de presos sentenciados a un período de cinco a veinte años se dio, de largo, en 2006 (40,9%). Ha habido, así, una tendencia duradera y paralela hacia estancias más largas en prisión bajo condena y el uso de penas privativas de libertad cada vez más largas; una tendencia que ganó impulso durante los 80 y que estalló después.

Si miramos a las salidas anticipadas de la cárcel durante el período 1980-1989, el volumen anual de presos penados liberados por alguna razón descendió un 35,3%, de 5.701 a 3.688, lo que supuso también una caída significativa en la proporción anual de presos penados, de 69,6% a 54,6%. En concreto el porcentaje de presos penados puestos en libertad vigilada, incrementó un 17,8% entre 1980 y 1989, de 381 a 449, pero este fue un aumento pequeño en proporción al total de los presos penados, que fue del 4,6% al 6,6%. Podemos deducir que la judicatura mostró muchas más tendencia a aprobar penas privativas de libertad largas que a conceder libertades vigiladas y que la posibilidad de acceder a libertades anticipadas se retrasó en buena medida por el alargamiento de las condenas. No es poco probable que las condenas fueran un medio por el cual los jueces consiguieron controlar el proceso de las liberaciones anticipadas incluso antes de que los delincuentes fuesen puestos entre rejas.

Durante el período 1990-2006, la cantidad de presos penados liberados por cualquier razón incrementó un 46,1%, de 4.021 a 5.876, pero cayó en proporción al total anual de presos penados, de un 52,9% a un 44,6%. Debido en gran parte a una intervención legislativa diseñada para adelantarse a la inminente protesta de los presos, el total de presos penados liberados anticipadamente bajo vigilancia sufrió un enorme incremento del 492,3% entre 1990 y 2006, de 600 a 2.954, que también fue un aumento significativo en la proporción anual de los presos penados, de 7,9% a 22,4%. Sin embargo, esta tendencia ascendente no ha sido constante a lo largo del tiempo. De hecho, se ha revertido ligeramente en los últimos años. En cualquier caso, las libertades anticipadas por sí solas no podrían haber impedido el incremento de los presos penados. Si bien la libertad anticipada (*parole*) ha sido el motivo más

común para la puesta en libertad de los penados, aumentando su proporción entre todas las modalidades de puesta en libertad de un 14,9% en 1990 a un 50,3% en 2006, las tasas de puesta en libertad por otros motivos (por ejemplo, la conversión de la pena en una multa, trabajos en beneficio de la comunidad) o descendió o aumentó de manera insignificante durante el mismo período (ver más detalladamente en Cheliotis, 2010a). Con sus poderes discrecionales sin tocar en esencia durante los años, la judicatura ha conseguido asegurar que las entradas «por la puerta principal» a la cárcel no se contrarresten con liberaciones «por la puerta trasera» (ver más detalladamente Cheliotis, 2010b).

1.5. El punitivo siglo XX

Una perspectiva histórica más amplia provee una lente adecuada a través de la cual comparar y contextualizar las tendencias punitivas en Grecia manifestadas en el uso del encarcelamiento. Dicha perspectiva revela inmediatamente la persistencia de la punitividad penal en el país como un mecanismo clave a través del cual el Estado ha buscado reducir los salarios y de esa manera sostener la obtención de beneficios para las élites burguesas bajo las condiciones de competencia en la economía mundial. Los objetivos pueden ser comunes a todos los Estados, pero es más probable que se persigan a través de la coerción directa en sociedades periféricas y semiperiféricas, como Grecia (ver Tayfur, 2003).

Así, por ejemplo, bajo el pretexto de luchar contra el comunismo, los años 20 vieron al Estado griego introducir medidas draconianas contra la expansión de la organización sindical del trabajo para mantener los salarios bajos. Particularmente perseguidos fueron los grandes sindicatos de los trabajadores del tabaco, la mayoría de los cuales eran refugiados de Asia Menor. La represión de las clases bajas se incrementó entre 1936 y 1940 bajo la dictadura del general Metaxas. Tras una ola de agitación social provocada por una mezcla de salarios bajos y el precio creciente de alimentos básicos, Metaxas subió al

poder prometiendo implementar soluciones autoritarias a la «cuestión laboral» (Mazower, 1991). Su acción en esta promesa fue ilustrada dramáticamente por los arrestos masivos indiscriminados y las deportaciones (Voglis, 2002). A pesar del escaso conocimiento de cifras, hay consenso en que miles fueron exiliados y encarcelados en las islas alrededor de Grecia en el período de entreguerras, la mayoría sin juicio (ver más detalladamente en Mazower, 1991, 1997; Seferiades, 2005).

Aparte de los exilios políticos, los datos oficiales disponibles sobre la población penitenciaria muestran que entre 1929 y 1937 la media anual de presos penados fue de 33.200 o 499 por cada 100.000 habitantes. De hecho, el año 1932 vio el máximo registrado de todos los tiempos con 37.809 presos penados, una tasa de 578 por cada 100.000 habitantes (cerca de cinco veces la tasa correspondiente en 2006). Si bien la inmensa mayoría de las sentencias eran cortas (no más de un año y habitualmente de hasta tres meses) y cerca de un cuarto de ellas eran convertidas finalmente en penas económicas, los presos sentenciados a períodos largos era sorprendentemente alto comparado con los estándares contemporáneos. En 1937, por ejemplo, el número de presos sentenciados a un período de un año o más era de 116 por cada 100.000 habitantes: 17,2% más alto que su tasa correspondiente en 2006 (96) y casi idéntico a la tasa de 2006 de presos condenados (118). Hay evidencia que sugiere que al menos parte de la población carcelaria por aquel entonces consistía en detenidos políticos, bien cumpliendo una porción de su sentencia en el sistema penitenciario «principal», o bien esperando deportación a una isla de exilio interno o bajo condena de tribunales civiles por violaciones de leyes criminales «comunes» (ver Kenna, 2001; Voglis, 2002; Seferiades, 2005).

Las medidas anticomunistas que datan de los años 20 se mantuvieron con vigor durante el período posterior a la II Guerra Mundial y durante la Guerra Civil griega de 1946-1949. Después de una relajación parcial que fue desde la década los cincuenta hasta 1966, volvieron a ser implementadas por la junta militar de 1967-1974. De una manera abrumadora, dichas medidas reflejaron las prioridades político-económicas de la Guerra Fría de los EE.UU. (que por aquel entonces dominaba

la vida política griega) y se unió al consentimiento de las élites burguesas del país que se beneficiaban de la distribución de la ayuda financiera americana al país (Tayfur, 2003). En particular, las guerrillas de izquierdas que habían luchado por la liberación de la Grecia ocupada en 1944 fueron rápidamente sometidas a una persecución sistemática en crudo contraste con los colaboradores de los nazis. El año 1945 vio aproximadamente a 10.000 izquierdistas ser mandados a la cárcel en lo que es conocido como el «Terror Blanco» (Voglis, 2002: 57). Es más, de acuerdo con Voglis, «en cualquier momento entre 1947 y 1949, entre 40.000 y 50.000 individuos fueron internados en cárceles y campamentos» (ibíd.: 63).

Los cincuenta marcaron una época de mayor estabilidad política que quedó interrumpida durante la década siguiente, cuando una facción competidora de la burguesía nacional ganó superioridad. El espaldarazo vino en 1967 con un golpe de estado militar que reafirmó los privilegios para el capital extranjero y sus clientes en Grecia (Tayfur, 2003). Durante los siete años de dictadura unos 10.000 individuos fueron deportados y 1.700 fueron condenados a períodos de cárcel por motivos políticos (Voglis, 2002: 224). Según estadísticas oficiales, la media anual de presos penados durante el mismo período fue de 13.448 o 152 por cada 100.000 habitantes. No está incluido en éstas el gran número de personas sujetas a detenciones cortas y brutales destinadas a extraer información acerca de las actividades de la resistencia y disuadir a la población general de involucrarse políticamente (Diamandouros, 1995). En 1974 la junta cayó y se estableció la democracia. Una transición apoyada por un giro que se alejaba de la dependencia exclusiva en una hegemonía decadente de EE.UU. para dirigirse hacia los beneficios de la membresía a la Comunidad Europea. Las nuevas condiciones anunciaban un declive temporal en el uso general del encarcelamiento. Entre 1975 y 1979, el total anual de presos penados cayó un 16,1%, de 9.650 (o 107 por cada 100.000 habitantes) a 8.088 (u 85 por cada 100.000 habitantes) mientras que el número de presos sentenciados a un año o más permaneció estable.

Nuestra inmersión en la historia de la Grecia del siglo XX no tiene como objetivo demostrar una moderación relativa en el uso del encarcelamiento hoy en día, sino más bien señalar una aterradora previsión de futuro. De hecho, el total de presos sentenciados a un año o más se ha estado encaminando rápidamente hacia los niveles registrados oficialmente en los años de entreguerras y parece destinado a superarlos pronto, dado que la correspondiente tasa de ingresos en prisión por cada 100.000 habitantes es significativamente mayor (por ejemplo, 39 en 2006 comparado con 28 en 1937). Yendo más allá de la descripción y la advertencia, el hecho recurrente de la punitividad penal en el país subraya el rol prominente de la coerción estatal en la gestión de la evolución capitalista en una sociedad semiperiférica. Esto no es negar la posibilidad de que la práctica penal griega haya sido influenciada de manera reciente por el neoliberalismo. Como se ha sugerido anteriormente, sin embargo, dicha influencia no puede sino haber sido limitada en la agravación de tendencias ya en curso.

2. (I)LÓGICAS INSTITUCIONALES: REDUCCIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y DESREGULACIÓN ECONÓMICA EN GRECIA

La endeble relación de la penalidad neoliberal con la realidad griega queda más reconocida y clarificada una vez que dejamos la esfera penal para examinar otras «lógicas institucionales» del neoliberalismo: la reducción de las prestaciones sociales (*welfare*) y la desregulación económica. En Grecia, la tendencia en gasto social lleva mucho tiempo aumentado, incluso durante el período asociado con la llegada del neoliberalismo. Pero esto no implica un Estado del Bienestar desarrollado, dado que la provisión se ha mantenido característicamente inadecuada. De hecho, la misma consistencia ha marcado la flexibilidad de las relaciones laborales en el país. A pesar de sus características cuasi-neoliberales, tanto el sistema de ayudas sociales como el mercado laboral en Grecia han estado condicionados por la duradera condición semiperiférica de la economía nacional. Acentúa este

punto la tardía y fragmentada introducción de las reformas neoliberales, así como su aplicación inconsistente y atrasada que ha asegurado que Grecia mantenga su reputación de faro del estatismo en Europa.

2.1. La expansión del gasto en prestaciones sociales

Durante la segunda mitad del siglo pasado, Grecia experimentó una ascendente tendencia general en el total del gasto público, y en gasto social más específicamente. Pero esto no es un indicador de la extensión o de la calidad de las prestaciones sociales, muestra que el imperativo neoliberal de reducción de la asistencia social ha sido insignificante para el caso griego. En porcentaje del PIB, el gasto público total en Grecia creció de los sesenta en adelante pero se mantuvo ampliamente por debajo de la media europea y de la de la OCDE (ver Economou, 2004; Pascual y Álvarez García, 2006; Paternoster et al., 2008; OECD, 2009b). A pesar de las críticas habituales y recientemente amplificadas, el tamaño del funcionariado en Grecia y los gastos relativos a salarios y pensiones se han mantenido muy cercanos a la media de la UE y de la OCDE. El empleo gubernamental, por ejemplo, se calculó en un 14% del total de los trabajadores en 2005, justo debajo de la media de las OCDE (OECD, 2009a)¹³. El gasto en salarios del gobierno había sido menor que la media europea en 1996 pero mientras esta última cayó hacia 2008, el gasto griego en salarios se colocó por encima de ella (OECD, 2009b).

El gasto en protección social a nivel nacional (por ejemplo: vivienda, sanidad, dependencia y exclusión social, así como seguridad social para las pensiones y beneficios por desempleo) también creció tras el establecimiento de la democracia en 1974 de poco más del 15% del PIB a un 20% en 1998 y casi el 24% en 2005 (Maloutas y Papatheodorou, 2004), si bien aún permanecía por debajo de la media de la OCDE (Adema y

¹³ También es importante notar que, a diferencia de los funcionarios, los trabajadores del sector público no tienen derecho a plaza fija, sino que son contratados con contratos de larga duración (Spanou, 2008).

Ladaique, 2009). Mientras que las pensiones han atraído una proporción mayor del gasto social nacional que la media de la UE (en 2005, por ejemplo, el 51,2% de los beneficios totales se gastaron en pensiones de jubilación y viudedad, en contraposición al 45,9% entre la UE de los 27), el gasto en pensiones como porcentaje del PIB se ha mantenido cerca de la media de la UE durante las dos últimas décadas (Athens News Agency, 29 de mayo de 2003; Petrášová, 2008).

2.2. La arraigada debilidad de la prestación de servicios sociales

A pesar del aumento en gasto social, Grecia ha ido con retraso consistentemente con respecto a sus homólogos europeos en la promoción de la igualdad social. Este fracaso ha estado mantenido por una prestación mínima e históricamente poco sistemática de ayudas sociales, agravado por un ambiente adverso de impuestos. Una vez más, el patrón histórico de ayudas desmiente la pertinencia del neoliberalismo, incluso si paradójicamente lo asemeja.

Las transferencias sociales, aparte de las pensiones, han tenido mucho menos impacto en el riesgo de pobreza en Grecia que las transferencias orientadas de manera similar en el resto de la UE. En 2008, por ejemplo, datos de Eurostat posicionaban a Grecia a la cola de los países de la UE de los 27 en términos de su efectividad de sus transferencias de beneficios sociales para la reducción del riesgo de la pobreza (Seferiades, 2006; Wolff, 2010; ver también, Lampousaki, 2010). Esto es apenas sorprendente dado que los beneficios de las prestaciones sociales no se han dirigido a los miembros más vulnerables de la población. Durante los 90, el 30% más pobre recibió menos del 30% de todos los pagos, mientras que aquellos con ingresos de clase media se beneficiaron desproporcionadamente de las ayudas que no eran pensiones a expensas tanto de los grupos con bajos ingresos como de los de los altos (Förster y Pearson, 2002). La desigualdad ha sido aún más exacerbada por un sistema de impuestos que redistribuye la riqueza regresivamente

y por la prevalencia de la evasión de impuestos (más común entre el decil de la población con los niveles más altos de ingresos; ver Papatheodorou, 2006; Matsaganis y Flevomotou, 2010).

Igualmente, y a diferencia de la amplia mayoría de los Estados miembros de la UE de los 27, Grecia nunca ha proporcionado unos ingresos garantizados a los individuos en estado de necesidad que no pueden contar con beneficios basados en el trabajo (Lampousaki, 2010). Como destacaba el Comité Europeo de los Derechos Sociales (2010), las personas necesitadas e incapaces de cubrir sus costes básicos de vida mediante otra fuente de ingresos tienen derecho meramente a una prestación de 234,50€ y asistencia médica gratuita¹⁴. Hasta mediados de la primera década de este siglo, la prestación de ayudas sociales dependía del historial de contribuciones a los impuestos y a los seguros de los potenciales receptores, con la consecuencia de que aquellos que nunca habían trabajado, que habían trabajado poco o que habían estado desempleados durante un largo período, era probable que no tuviesen derecho a ninguna forma de prestación social (Ver Papadopoulos, 2006). Los movimientos en los últimos años para ampliar la cobertura de beneficios para aquellos con más privaciones no han sido suficientes para una garantía de ingresos y las prestaciones siguen siendo bajas y limitadas en duración (ver Comité Europeo de los Derechos Sociales, 2010; Lampousaki, 2010; EURES, 2010; Kousta, 2010). Más que el Estado, son las familias sobre las que han descansado las redes de protección (ver, por ejemplo, Karakatsanis, 2000; Papadopoulos, 2006).

Como era de esperar, la prestación de ayudas es más generosa para los griegos nacionales que para otros. Grecia ha ratificado un número de tratados europeos e internacionales claves que garantizan derechos sociales fundamentales para todos, pero ha sido reacio a reconocer la situación y las necesidades de grupos como los gitanos, refugiados, solicitantes

¹⁴ El Servicio Nacional de Sanidad griego se estableció tan recientemente como en 1983 (ver más en Petmesidou, 2006).

de asilo político e inmigrantes de manera más general (ver, por ejemplo, IHF et al., 2000; Sitaropoulos, 2002; Pavlou et al., 2009)¹⁵. Si bien las tasas de solicitudes de asilo en Grecia están ahora entre las más altas de Europa, el país ha mantenido una de las tasas más bajas de reconocimiento de refugiados (ver Papadimitrou y Papageorgiou, 2005; Eurostat, 2010). Es más, no existe una base legal clara para que los individuos indocumentados y los inmigrantes ilegales pidan asistencia social de emergencia (Comité Europeo de Derechos Sociales, 2010) y hasta los 90, la prestación social básica para los refugiados y solicitantes de asilo era provista exclusivamente por ONGs nacionales e internacionales (Black, 1994).

Aparte de una cobertura parcial, otro fallo de la provisión de asistencia social ha sido la inadecuación de las ayudas. Las prestaciones sociales mínimas se han establecido en unos niveles tan bajos que dejan a los receptores de ayudas en el umbral de la pobreza, o por debajo de él. En 2007, por ejemplo, la ayuda mínima por desempleo para individuos sin personas dependientes fue sólo de 174,75€ al mes, una cifra bastante por debajo de la línea de la pobreza (Comité Europeo de Derechos Sociales, 2010). Desde los 90, sin embargo, la reducción de las ayudas en algunas áreas clave ha coincidido con la expansión en otras, o incluso se han intercambiado. Mientras que, por ejemplo, la financiación gubernamental y los subsidios para instituciones tales como residencias y guarderías se recortaron (Petmesidou, 1996, 2006; Pavlou et al., 2009), surgieron proyectos en vivienda, sanidad, educación y formación para sectores vulnerables y desaventajados de la población (estimulados y apoyados por la UE; ver, por ejemplo, Karakioulafis, 2007). En el caso de las pensiones, el valor de la ayuda mínima cayó por debajo del umbral de la pobreza en la segunda mitad de los 90 (Petmesidou, 1996) pero posteriormente aumentó por encima de ella (Comité Europeo de Derechos Sociales, 2010).

¹⁵ Los gitanos e inmigrantes, así como los sin techo y la población institucionalizada, están sobrerrepresentados entre los más pobres y vulnerables, pero son excluidos de los índices nacionales de pobreza que se basan en encuestas de presupuestos de los hogares (Tsakoglou y Mitrakos, 2006; NSSG, 2010a).

En Grecia, la debilidad del sistema de ayudas no es nada nuevo. Las presiones socioeconómicas han sido calmadas durante mucho tiempo mediante una administración selectiva de la ayuda política. El clientelismo ha asegurado la cooptación de intereses específicos de ciertos sectores por medio del acceso privilegiado al empleo estatal y al proteccionismo. De hecho, durante el último siglo, las afiliaciones y las creencias políticas han jugado un papel central a la hora de determinar el acceso a un amplio rango de beneficios sociales provistos sobre una base discrecional por parte del Estado, incluyendo empleo en el sector público (ver, por ejemplo, Pagoulatos, 2003; Petmesidou, 2006). Las demandas de reformas sociales también fueron bloqueadas por la ausencia de un desarrollo industrial fordista y sus patrones asociados de solidaridad colectiva (Petmesidou, 1996; Petmesidou y Mossialos, 2006). Esto no fue una mera coincidencia sino el resultado del diseño estatal: el apoyo a los propietarios y las empresas pequeñas —que reduciría efectivamente la demanda de una prestación unificada de redes de asistencia social— ha reflejado el deseo explícito de las élites políticas griegas de impedir el crecimiento de la clase trabajadora de cara a mantener la estabilidad sociopolítica (Mazower, 1991; Petmesidou, 2006).

El apoyo estatal para el establecimiento gradual y selectivo de fondos de seguridad social para sectores profesionales específicos de la fuerza de trabajo dejó un legado duradero de provisión desigual y una amplia proporción de la población sin ninguna cobertura (Petmesidou, 2006; Tikos, 2008). Particularmente vulnerables han permanecido los autónomos y, por supuesto, aquellos que trabajan en la economía informal, ambos de un tamaño considerable en comparación con la UE y ambos carentes de representación sindical. Los autoempleados suponían el 21% del total de la fuerza de trabajo en 2007, que era más de dos veces la media de la UE de los 27 (ver Pedersini y Coletto, 2009), mientras que la economía informal ha sido una de las más grandes en la UE (ver Schneider y Buehn, 2009; Matsaganis y Flevomotou, 2010). En Grecia, entonces, un sistema de ayudas sociales muy inadecuado ha ido de la mano con una economía «flexible» y poco regulada.

2.3. La economía flexible y poco regulada

Reflejo de las condiciones semiperiféricas, la debilidad de la representación del trabajo en Grecia (ver Seferiades, 1999; Matsaganis, 2006) ayuda a explicar no sólo el relativo bajo nivel de los salarios en comparación con el resto de la UE, sino también el hecho de que los trabajadores (obreros) están bajo un riesgo de pobreza mucho más alto que el de la amplia mayoría de sus equivalentes europeos. Durante los 90, los costes del trabajo en el país eran los segundos más bajos de la UE (Papadimitriou, 2006). Grecia también tenía la segunda proporción más alta de trabajadores pobres de la UE de los 27 en 2006 (Wolff, 2010), año en el que la mitad de los empleados recibió ingresos mensuales netos de entre 501 y 1000 euros (Tikos, 2009), justo por encima de la línea de la pobreza (Tikos, 2009). De hecho, y a pesar de alegatos en contra (incluyendo aquellos de la OCDE (2010a) y del FMI (2009)), el mercado laboral griego ha estado caracterizado durante mucho tiempo por bajos salarios, bajos costes laborales indirectos, y una alta flexibilidad (por ejemplo, trabajo a tiempo parcial y de temporada, indemnizaciones poco adecuadas por despidos de trabajo; una alta elasticidad de los salarios; Comité Europeo de Derechos Sociales, 2010; Livanos, 2010). Como ilustran irónicamente las expresiones de frustración entre los proponentes del neoliberalismo en Grecia, la flexibilidad del mercado laboral del país está arraigada en prácticas históricas de informalidad antes que en reglas formales codificadas (ver más en Mihail, 1996; Seferiades, 1999, 2003; Papadimitriou, 2006).

Dejando a un lado la flexibilidad del mercado laboral griego, ni siquiera la emergencia de desempleo masivo en los 90 puede ser convincentemente unida al neoliberalismo. En primer lugar, el desempleo ya había comenzado a escalar en los 80: entre 1980 y 2000, el crecimiento más marcado fue en 1981, cuando la tasa anual se incrementó la mitad (de 2,6% a 3,9%). En segundo lugar, el desempleo no siguió un patrón consistente durante el período en el que las políticas neoliberales estaban ganando ascendencia. Mientras que la tasa de desempleo aumentó durante los 90, alcanzando un máximo del 12% en

1999 y sobrepasó así la media europea (Eurostat, 2009), cayó en 2000 y, para la segunda mitad de la década, había vuelto a los niveles de los últimos años de los 80 y principios de los 90 (FMI World Economic Outlook Database).

Existe un amplio consenso acerca de que políticas tales como el desmantelamiento de las protecciones de empleo, la rebaja de los costes laborales, la reducción del proteccionismo, la expansión de la liberalización del crédito, la desregulación del mercado y la privatización de los servicios públicos que cuestionaban los intereses de la clase media, fueron introducidos efectivamente en Grecia sólo después de los 80 y fueron aplicados lenta y bastante menos exhaustivamente que entre la mayoría de los estados miembros de la OCDE (ver, por ejemplo, Staikouras, 2004; Pagoulatos, 2006; Tsakalotos, 2008; Spanou, 2008; OCDE, 2010a). La ilustración más convincente de la «baja capacidad de reforma» del país ha sido el débil resultado de repetidos intentos desde los 90 para reestructurar el sistema de pensiones (por ejemplo, ampliando la edad de jubilación, incrementando los niveles de contribución, y bajando los topes de pensión) (Featherstone y Papadimitriou, 2008: 114). En los 90 surgieron esfuerzos significativos para reformar el mercado laboral (por ejemplo: incrementando las horas extras obligatorias a la vez que se reducía su coste y relajando los límites de los despidos masivos) y cogieron velocidad a mediados de la primera década del 2000, pero su impacto global también es considerado «modesto» (ibíd.: 149). La privatización fue una de las políticas que más avanzaron —de hecho, entre 2000 y 2008, Grecia tenía uno de los programas de privatización más activos entre los miembros de la OCDE—, si bien en 2010 el sector público aún era juzgado como «relativamente grande», el uso de las restricciones en los precios y los controles del mercado «persuasivos», y el grado de involucración gubernamental en la actividad económica, «excesivo» (OCDE, 2010a: 7, 17; de ahí el redoblamiento de los esfuerzos neoliberalizadores de los últimos meses (ver, por ejemplo, *Financial Times*, 5 de agosto de 2010)).

De modo que los problemas arraigados y emergentes del mercado laboral griego no se explican plausiblemente haciendo

referencia a un florecimiento del neoliberalismo, sino que lo hacen mejor haciendo referencia a las condiciones semiperiféricas de la propia economía. Las tendencias del mercado laboral han reflejado una economía nacional fortalecida superficialmente por el proceso de integración en la UE, pero frenada por su debilidad estructural esencial (ver, por ejemplo, Tayfur, 2003; Featherstone y Papadimitriou, 2008). La inversión, y el acceso al mercado, de la UE allanó el camino para el aumento de la fuerza laboral nacional atrayendo a más mujeres (Kanellopoulos, y Mavromaras, 1999), inmigrantes y griegos que de otra manera hubieran emigrado (Mihail, 1996). Por otra parte, niveles persistentemente bajos de inversión en investigación y actividades de desarrollo (entre las más bajas de la UE; Seferiades, 2006), unidos con aspectos profundamente asentados del sector de los negocios (por ejemplo, su composición de pequeñas y medianas empresas especializadas en baja tecnología, industria o actividades de servicios; Liagouras et al., 2003), contribuyeron a mantener a Grecia atrapada en su estado semiperiférico. Mientras que estrictas políticas de inmigración estaban funcionando junto con la represión penal para confinar a la mayoría de los inmigrantes a trabajos de escasa importancia, técnicos y con escasos salarios (Lawrence, 2005), los griegos encontrarían cada vez más sus aspiraciones —cada vez más altas por la expansión de la educación y el consumo de medios de comunicación— insatisfechas por el mercado de trabajo nacional.

3. COMENTARIOS FINALES

Durante los últimos 30 años, la arremetida de la cultura consumista ha acelerado el aumento de las aspiraciones sociales al mismo tiempo que su satisfacción se ha hecho más precaria en general. El descenso significativo en los niveles absolutos de pobreza experimentada entre los inicios de los sesenta y los inicios de los ochenta se estancaron a partir de entonces, dejando la proporción de población en riesgo de pobreza como una de las más altas de la UE y de la OCDE (ver más en Balourdos, 2004; Tsakloglou y Mitrakos, 2006; Lampousaki, 2010;

NSSG, 2010a; OCDE, 2010a). Mientras que Grecia también presenció una reducción global en la desigualdad de ingresos desde mediados de los 80 hasta los primeros años de este siglo (ver OCDE, 2009c), ésta se ralentizó entre 2001 y 2004 (Medgyesi, 2008), y los niveles permanecieron entre los más altos de la UE de los 27 (ver NSSD, 2010b). La estructura de las políticas de bienestar ha jugado un papel importante a este respecto asegurando —en conjunción con unos niveles de impuestos crecientes— que no haya habido una transferencia neta positiva del Estado al trabajo desde los 80¹⁶.

Aún así, Grecia también experimentó un crecimiento significativo en el consumo doméstico a partir de los 90 (un 22% entre 1993/1994 y 1998/1999, y un 12,1% entre 1998/1999 y 2004/2005; NSSG, 2001a). Esto fue impulsado por la desregulación tanto del crédito del consumidor como del hogar, que en cambio produjeron un marcado incremento en el endeudamiento doméstico (particularmente entre los grupos con ingresos más altos; Mitakos et al., 2005). Si bien el ratio de la deuda doméstica en los ingresos nacionales ha sido comparativamente bajo con respecto a los estándares europeos, el incremento medio anual de préstamos para la vivienda y bienes de consumo ha sobrepasado por mucho la media de la Eurozona en los años recientes (ver Athanassiou, 2007). En 2009, una encuesta de opinión pública paneuropea colocó a los griegos entre aquellos con más probabilidad de dar cuenta de serios problemas financieros y dificultades para pagar las facturas y las deudas de los préstamos (Eurobarómetro, 2010). Así, las expectativas consumistas han avanzado a un ritmo considerablemente más rápido al que la pobreza y la desigualdad han descendido. Es más, el consumismo se ha expandido sobre la base inestable del endeudamiento en un contexto de creciente desempleo.

¹⁶ De acuerdo con un estudio que compara la provisión de prestaciones estatales a los empleados y la contribución de los empleados al presupuesto estatal (a través de la producción y de los impuestos) entre 1958 y 1995, unas ratios de impuestos crecientes y los niveles de desempleo desde mediados de los ochenta han significado que no hubo una ganancia neta por el trabajo, a pesar del incremento en los salarios reales durante el mismo período (Maniatis, 2003; ver también Tsakalotos, 2008).

Así como el encarcelamiento en Grecia hoy sirve para contener las ansiedades y los consiguientes desórdenes en los niveles más bajos de la estructura social, también ayuda a desplazar las inseguridades de la clase media en fracciones de la población «sobre las que se puede actuar». Aunque probablemente exacerbado por el advenimiento del neoliberalismo, puede que especialmente por la liberalización de créditos, las raíces de las ansiedades de las clases medias y bajas yacen en las tensiones sociales, políticas y económicas típicas de las sociedades semiperiféricas: las dinámicas particularmente tensas de los derechos sociales y la movilidad, la representación política y la provisión estatal, y las relaciones laborales y la generación de beneficios. Nuestra separación del modelo de Wacquant, entonces, va más allá de la mera semántica; los hallazgos de este artículo no pueden reconciliarse con su aproximación simplemente ampliando la interpretación del neoliberalismo para incorporar manifestaciones informales cercanas.

Aparte de eso, el uso indiscriminado del concepto de neoliberalismo puede alentar fácilmente una amnesia colectiva; un énfasis en el presente a costa de una perspectiva informada históricamente. Aquí está implícito el problema político fundamental de no ser capaz de invertir o resistir una tendencia determinada sin conocimiento de los mecanismos que le dieron lugar en primer lugar o que pueden haberle dado lugar en ocasiones anteriores en el pasado. Es igualmente importante reconocer la forma en la que el concepto de neoliberalismo puede socorrer a los intereses nacionalistas —ya sean de izquierdas o de derechas— que sitúan la causa de todos los males nacionales en el «dedo extranjero» (ver más en Mazower, 1991). En el caso de Grecia, los discursos críticos con el neoliberalismo pueden, así, funcionar para desviar la atención de la culpabilidad de las élites locales y de la verdadera debilidad estructural de la economía nacional, si bien las presiones extranjeras no pueden ser ignoradas. Tales efectos no son distintos de lo que Wacquant (1997) ha llamado en sus trabajos previos «la lógica del juicio»: no reconocer nuestros propios males culpando a otros.

A un nivel más amplio, el caso griego apunta a los peligros de las asunciones occidentalistas que subyacen al uso del neo-

liberalismo como explicación para los crecientes niveles internacionales de punitividad. Los marcos teóricos basados en las experiencias occidentales del desarrollo capitalista son problemáticamente aplicados a Estados de la semiperiferia, dadas sus muy distintas trayectorias sociales y económicas. De hecho, suponiendo la «americanización» efectiva de la Grecia contemporánea, la tesis de la penalidad neoliberal no es menos propensa que el discurso de la «globalización» a prestar al neoliberalismo la apariencia de inevitabilidad. Al igual que es vital estar atento a las representaciones del neoliberalismo como una condición necesaria para los Estados-nación para competir en la economía global, también es imperioso evitar elevar la difusión del neoliberalismo al terreno de las leyes naturales universales. El fatalismo aumenta la vulnerabilidad a las ideologías, y éstas pueden consistir en falsas pretensiones de necesidad tanto como en las «lógicas del juicio» nacionalistas.

Nada de lo dicho más arriba pretende descartar la posibilidad de una causa común que sostenga los crecientes niveles de punitividad entre tantas sociedades durante los últimos años. Pero esa causa no puede ser el neoliberalismo.

BIBLIOGRAFÍA

- ALOSKOFIS, W. (2005) *Social and Penal Situation of Prisoners in the Judicial Prison of Korydallos: Differences between Natives and Foreigners*. Informe entregado al Minsiterio de Justicia [en griego].
- ATHANASSIOU, E. (2007) 'Prospects for Household Borrowing in Greece and Their Importance for Growth', *South-Eastern Europe Journal of Economics* 5(1): 89-101.
- Athens News Agency, 'Greece Spends Same Percentage of GDP for Pensions as other EU States', 29 de mayo de 2003.
- ADEMA, W. y LADAIQUE, M. (2009) 'How Expensive is the Welfare State? Gross and Net Indicators in the OECD Social Expenditure Database (SOEX)', *OECD Social, Employment and Migration Working Papers* No. 92. Paris: OECD.
- BALOURDOS, D. (2004) 'Poverty', en D. Charalambis, L. Maratou-Alipranti y A. Hadjiyanni (eds) *Recent Social Trends in Greece: 1960-2000*, pp. 660-668. Montreal: McGill-Queen's University Press.

- BLACK, R. (1994) 'Livelihoods under Stress: A Case Study of Refugee Vulnerability in Greece', *Journal of Refugee Studies* 7(4): 360-377.
- CHELIOTIS, L. K. (2010a) 'Prisons and Parole', en L. K. Cheliotis y S. Xenakis (eds) *Crime and Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives*. Oxford: Peter Lang AG.
- (2010b) 'Greece', en N. Padfield, D. van Zyl Smit y F. Dünkel (eds) *Release from Prison: European Policy and Practice*, pp. 213-236. Cullompton: Willan.
- CHELIOTIS, L. K. y S. XENAKIS (2011, en prensa) «Crime, Fear of Crime and Punitiveness», en L. K. Cheliotis y S. Xenakis (eds) *Crime and Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives*. Oxford: Peter Lang AG.
- CHRISTIE, N. (1994) *Crime Control as Industry: Towards Gulags, Western Style*, 2nd edn. London: Routledge.
- COMITÉ EUROPEO DE LOS DERECHOS SOCIALES (2010) *European Social Charter: Conclusions XIX-2 (2009) (Greece): Articles 3, 11, 12, 13, 14 and Article 4 of the Additional Protocol of the Charter*. Strasbourg: Council of Europe.
- DIAMANDOUROS, P. N. (1995) 'Greece', en N. J. Kritz (ed.) *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Volume II: Country Studies*, pp. 243-282. Washington, DC: United States Institute of Peace.
- ECONOMOU, D. (2004) 'Macro-Economic Trends', en D. Charalambis, L. Maratou-Alipranti y A. Hadjiyanni (eds) *Recent Social Trends in Greece: 1960-2000*, pp. 35-43. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- EURES (2010) *Living and Working Conditions: Greece*. Disponible en: <http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=living&lang=en&parentId=0&countryId=GR>
- EUROBARÓMETRO (2010) *Poverty and Social Exclusion*. Brussels: European Commission.
- EUROSTAT (2009) *Europe in Figures: Eurostat Yearbook 2009*. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Union.
- (2010) *Combating Poverty and Social Exclusion: A Statistical Portrait of the European Union 2010*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- FEATHERSTONE, K. y D. PAPADIMITRIOU (2008) *The Limits of Europeanisation: Reform Capacity and Policy Conflict in Greece*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- FEATHERSTONE, K. y P. TINIOS (2006) 'Facing Up to the Gordian Knot: The Political Economy of Pension Reform', en M. Petmesidou y E. Mosialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 174-193. Aldershot: Ashgate.
- Financial Times* 'Greece Praised for Swift Structural Reforms', 5 August 2010.

- FMI (2009) *Greece: Selected Issues: IMF Country Report 9/245*. Disponible en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09245.pdf>
- FÖRSTER, M. y M. PEARSON (2002) 'Income Distribution and Poverty in the OECD Area: Trends and Driving Forces', *OECD Economic Studies* No. 34. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/16/33/2968109.pdf>
- IHF (2000) *Report to the OSCE Implementation Meeting on Human Dimension Issues: Greece (Excerpts on Roma)*. Disponible en: <http://www.greekhelsinki.gr/pdf/ihf-ghm-mr-gg-osce-report-on-greece-roma.PDF>
- IOAKIMOGLU, E. (2000) *Annual Economic and Employment Outlook*. Athens: INE (Labour Institute of the Greek General Confederation of Labour (INE/GSEE). Disponible en: <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/09/feature/gr0009185f.htm>
- KANELLOPOULOS, C. N. y K. G. MAVROMARAS (1999) 'Male-Female Labour Market Participation and Wage Differentials in Greece', *Discussion Paper* No. 70. Athens: Centre of Planning and Economic Research (KEPE).
- KARAKATSANIS, N. (2000) 'Relying on Stop-Gap Measures: Coping with Unemployment in Greece', en N. G. Bermeo (ed.) *Unemployment in Southern Europe: Coping with the Consequences*, pp. 240-262. London: Frank Cass.
- KARAKIOULAFIS, C. (2007) *Youth and Work: The Case of Greece*. INE/GSEE submission to the European Industrial Relations Observatory (EIRO). Disponible en: <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/12/tfeature/gr0512102t.htm>
- KENNA, M. E. (2005) *The Social Organisation of Exile: Greek Political Detainees in the 1930s*. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
- KOUSTA, E. (2010) *Government Grants Social Solidarity Aid to Vulnerable Groups*. INE/GSEE submission to the European Industrial Relations Observatory (EIRO). Disponible en: <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/01/articles/gr1001019i.htm>
- LAMPOUSAKI, S. (2010) *Working Poor in Europe: Greece*. INE/GSEE submission to a comparative study by the European Working Conditions Observatory (EWCO). Disponible en: <http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0910026s/index.htm>
- LAWRENCE, C. (2005) 'Re-Bordering the Nation: Neoliberalism and Racism in Rural Greece', *Dialectical Anthropology* 29(3-4): 315-334.
- LIAGOURAS, G., A. PROTOGEROU y Y. CALOGHIROU (2003) 'Exploring Mismatches Between Higher Education and the Labour Market in Greece', *European Journal of Education* 38(4): 413-426.
- LIVANOS, I. (2010) 'The Wage-Local Unemployment Relationship in a Highly Regulated Labour Market: Greece', *Regional Studies* 44(4): 389-400.
- LOADER, I. y R. SPARKS (2010) 'Wacquant and Civic Sociology: «Formative Intentions» and «Formative Experiences»', *Criminology & Criminal Justice* 10(4).

- MALOUTAS, T. y C. PAPTHEODOROU (2004) 'Welfare System', en D. Charalambis, L. Maratou-Alipranti y A. Hadjiyanni (eds) *Recent Social Trends in Greece: 1960-2000*, pp. 331-343. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- MANIATIS, T. (2003) 'The Net Social Wage in Greece 1958-1995', *International Review of Applied Economics* 17(4): 377-398.
- MATSAGANIS, M. (2006) 'Muddling Through: The Trials and Tribulations of Social Security', en M. Petmesidou y E. Mossialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 147-173. Aldershot: Ashgate.
- MATSAGANIS, M. y M. FLEVOMOTOU (2010) 'Distributional Implications of Tax Evasion in Greece', *GreeSE Paper* 31. London: Hellenic Observatory, London School of Economics.
- MAZOWER, M. (1991) *Greece and the Inter-War Economic Crisis*. Oxford: Oxford University Press.
- (1997) 'Policing the Anti-Communist State in Greece, 1922-1974', en M. Mazower (ed.) *The Policing of Politics in the Twentieth Century: Historical Perspectives*, pp. 129-150 Oxford: Berghahn Books.
- MEDGYESI, M. (2008) 'Income Distribution in European Countries: First Reflections on the Basis of EU-SILC, 2005', en I. G. Tóth (ed.) *Tárki European Social Report*, pp. 88-105. Budapest: Társi.
- MIHAIL, D. M. (1996) 'Unemployment and Labour Market Policies in Greece', *Spoudai* 46(1-2): 16-30.
- MITRAKOS, T. M., G. T. SIMIGIANNIS y P. T. TZAMOURANI (2005) 'Indebtedness of Greek Households: Evidence from a Survey', *Bank of Greece: Economic Bulletin* 25: 13-35.
- NELKEN, D. (2010) 'Denouncing the Penal State', *Criminology & Criminal Justice* 10(4).
- NSSG (2010a) 'Statistics on Income and Living Conditions 2008: Risk of Poverty', Nota de prensa. Piraeus: NSSG.
- (2010b) 'Statistics on Income and Living Conditions 2008: Income Inequality', Press Release. Piraeus: NSSG.
- OCDE (2009a) *Country Note: Greece*. Paris: OCDE.
- (2009b) *Economic Survey of Greece 2009: Enhancing Fiscal Viability*. Paris: OCDE.
- (2009c) *OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics*. Paris: OCDE.
- (2010a) *Greece at a Glance: Policies for a Sustainable Recovery*. Paris: OCDE.
- (2010b) *Jobs for Youth: Greece 2010*. Paris: OCDE.
- PAGOULATOS, G. (2003) *Greece's New Political Economy: State, Finance and Growth from Postwar to EMU*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- PAPADIMITRIOU, D. (2006) 'The Limits of Engineering Collective Escape: The 2000 Reform of the Greek Labour Market', en K. Featherstone (ed.) *Politics and Policy in Greece*, pp. 159-179. London and New York: Routledge.

- PAPADIMITRIOU, P. N. y I. F. PAPAGEORGIOU (2005) 'The New «Dubliners»: Implementation of European Council Regulation 343/2003 (Dublin-II) by the Greek Authorities', *Journal of Refugee Studies* 18(3): 299-318.
- PAPADOPOULOS, T. (2006) 'Support for the Unemployed in a Familistic Welfare Regime', en M. Petmesidou y E. Mossialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 219-238. Aldershot: Ashgate.
- PAPATHEODOROU, C. (2006) 'The Structure of Household Income and the Distributional Impact of Income Taxes and Social Security Contributions', en M. Petmesidou y E. Mossialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 99-125. Aldershot: Ashgate.
- PASCUAL, M. y S. ÁLVAREZ GARCÍA (2006) 'Government Spending and Economic Growth in the European Union Countries: An Empirical Approach', *SSRN Working Paper*. Disponible en: <http://ssrn.com/abstract=914104>
- PATERNOSTER, A., M. WOZOWCZYK y A. LUPI (2008) *General Government Expenditures and Revenue in the EU, 2006*. Brussels: European Communities.
- PAVLOU, M., K. LYKOVARDI, D. HORMOVITIS y I. PROKOPI (2009) 'Housing Conditions of Roma and Travellers in Greece'. Hellenic League for Human Rights(HLHR)-KEMO.
- PEDERSINI, R. y D. COLETTI (2009) *Self-Employed Workers: Industrial Relations and Working Conditions*. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). Disponible en http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s_2.htm
- PETMESIDOU, M. (1996) 'Social Protection in Greece: A Brief Glimpse of a Welfare State', *Social Policy and Administration* 30(4): 324-347.
- (2006) 'Tracking Social Protection: Origins, Path Peculiarity, Impasses and Prospects', en M. Petmesidou y E. Mossialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 25-54. Aldershot: Ashgate.
- PETMESIDOU, M. y E. MOSSIALOS (2006) 'Introduction: Addressing Social Protection and Policy in Greece', en M. Petmesidou y E. Mossialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 1-21. Aldershot: Ashgate.
- PETRÁŠOVÁ, A. (2008) *Social Protection in the European Union: Statistics in Focus 48*. Luxemburg: Eurostat, European Communities. Disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-046/EN/KS-SF-08-046-EN.PDF
- SCHNEIDER, F. y A. BUEHN (2009) 'Shadow Economies and Corruption All Over the World: Revised Estimates for 120 Countries', *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*.
- SEFERIADES, S. (1999) 'Low Union Density amidst a Conflictive Contentious Repertoire: Flexible Labour Markets, Unemployment, and Trade

- Union Decline in Contemporary Greece', *EUI Working Paper* No. 99/6. Florence: European University Institute.
- (2003) 'The European Employment Strategy Against a Greek Benchmark: A Critique', *European Journal of Industrial Relations* 9(2): 189-203.
 - (2005) 'The Coercive Impulse: Policing Labour in Interwar Greece', *Journal of Contemporary History* 40(1): 55-78.
 - (2006) 'Employment Policy in the «European Employment Strategy» Era: What Prospects?', en M. Petmesidou y E. Mossialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 194-218. Aldershot: Ashgate.
- SITAROPOULOS, N. (2002) 'Refugee Welfare in Greece: Towards a Remodelling of the Responsibility-Shifting Paradigm?', *Critical Social Policy* 22(3): 436-455.
- SPANOU, C. (2008) 'State Reform in Greece: Responding to Old and New Challenges', *International Journal of Public Sector Management* 21(2): 150-173.
- STAIKOURAS, P. K. (2004) 'Structural Reform Policy: Privatisation and Beyond—The Case of Greece', *European Journal of Law and Economics* 17(3): 373-398.
- TAYFUR, M. F. (2003) *Semiperipheral Development and Foreign Policy: The Cases of Greece and Spain*. Aldershot: Ashgate.
- TIKOS, S. (2008) *Social Partners and Opposition Parties Oppose Government Reforms of the Pension System*. Submission by INE/GSEE to the European Industrial Relations Observatory (EIRO). Disponible en: <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/05/articles/gr0805029i.htm>
- TSAKALOTOS, E. (1991) 'Structural Change and Macroeconomic Policy: The Case of Greece (1981-85)', *International Review of Applied Economics* 5(3): 253-276.
- (2008) 'Modernisation and Centre-Left Dilemmas in Greece: The Revenge of the Underdogs', *GreeSE Paper* No. 13. London: Hellenic Observatory, London School of Economics.
- TSAKLOGLOU, P. y T. MITRAKOS (2006) 'Inequality and Poverty in the Last Quarter of the 20th Century', en M. Petmesidou y E. Mossialos (eds) *Social Policy Developments in Greece*, pp. 126-143. Aldershot: Ashgate.
- UN (2004) *Greece: Public Administration: Country Profile*. United Nations Public Administration Network. Disponible en: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023214.pdf>
- VOGLIS, P. (2002) *Becoming a Subject: Political Prisoners during the Greek Civil War*. New York and Oxford: Berghahn Books.
- WACQUANT, L. J. D. (1992a) 'Preface', en P. Bourdieu y L. J. D. Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*, pp. ix-xiv. Cambridge: Polity.
- (1992b) 'Toward a Social Praxeology: The Structure and Logic of Bourdieu's Sociology', en P. Bourdieu y L. J. D. Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*, pp. 1-59. Cambridge: Polity.

- (1997) 'For an Analytic of Racial Domination', *Political Power and Social Theory*, 11: 221-234.
 - (2009a) *Prisons of Poverty*, expanded edn. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
 - (2009b) *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*. Durham and London: Duke University Press.
 - (2010) 'Class, Race & Hyperincarceration in Revanchist America', *Daedalus* 139(3): 1-17.
- WOLFF, P. (2010) *Population and Social Conditions: Statistics in Focus 9*. Luxembourg: Eurostat. Disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-009/EN/KS-SF-10-009-EN.PDF

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. Wacquant y la ciudad desde sus márgenes, <i>Ignacio González Sánchez</i>	7
---	---

PARTE I

TEORÍA SOCIAL: ENCARNACIÓN Y PODER

1. El cuerpo, el gueto y el Estado Penal. Una breve guía bio- gráfica y analítica, <i>Loïc Wacquant</i>	19
2. Cuerpo, mente y gueto. Una reapropiación creativa de la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu, <i>José Manuel Fernández</i>	51
3. Venas abiertas: memorias políticas y corpóreas de la vio- lencia, <i>Francisco Ferrándiz</i>	89

PARTE II

MARGINALIDAD HUMANA: FORMAS Y MECANISMOS DE RELEGACIÓN EN LA CIUDAD DUAL

4. La estigmatización territorial en la edad de la marginalidad avanzada, <i>Loïc Wacquant</i>	119
5. La marginalidad avanzada como uno de los semblantes del capital simbólico negativo, <i>Miguel Alhambra Delgado</i>	135
6. El concepto de gueto como analizador social: abriendo la caja negra de la exclusión social, <i>Luis Enrique Alonso</i>	151
7. Parias urbanos, parias mediáticos: los medios de comuni- cación y la marginación de la pobreza, <i>Félix A. López Román</i>	183

PARTE III
ESTADO PENAL:
LA CONTENCIÓN PUNITIVA COMO POLÍTICA
PARA LA POBREZA

8. La tormenta global de la ley y el orden: sobre neoliberalismo y castigo, <i>Loïc Wacquant</i>	203
9. El Estado de Derecho y el orden social, <i>Juan S. Pegoraro</i> ...	229
10. La reconfiguración del Estado y del castigo, <i>Ignacio González Sánchez</i>	235
11. ¿Punitividad, benevolencia o ambas? Limitaciones conceptuales de algunos discursos contemporáneos, <i>Alfonso Serrano Maíllo</i>	307
12. Simbiosis vital, <i>Dario Malventi</i>	329
13. ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo con esto? Hacia una economía política del castigo en Grecia, <i>Leonidas K. Cheliotis y Sappho Xenakis</i>	365
14. El Estado penal y el gobierno de la marginalidad en la América Latina contemporánea, <i>Markus-Michael Müller</i>	401
EPÍLOGO. De la clase dominante al campo del poder, <i>Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant</i>	423
Lista de autores	455